



## **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL**

**Medellín, diez (10) de noviembre de dos mil veintitrés (2023)**

Demandante: JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA PINTO  
Demandados: ACP COLPENSIONES Y PORVENIR S.A.  
Radicado: 05001 31 05 012 2023 00041 01  
Sentencia: S-317

### **SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA**

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en este acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver los **recursos de apelación** interpuestos por **PORVENIR S.A., y por COLPENSIONES**, al igual que el grado jurisdiccional de **Consulta** a favor de esta última, con motivo de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín el día 2 de junio de 2023.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante sentencia escrita, aprobada previamente por los integrantes de la Sala.

### **PRETENSIONES**

JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA PINTO demandó a PORVENIR S.A., y a COLPENSIONES, pretendiendo se declare la ineficacia de la afiliación al

RAIS administrado por PORVENIR S.A., declarando válida, vigente y sin solución de continuidad la afiliación al RPM administrado por COLPENSIONES.

En consecuencia, solicita se condene a PORVENIR a trasladar a COLPENSIONES todos y cada uno de los aportes y rendimientos sin ningún tipo de descuento, y a Colpensiones a recibirlos teniendo como válida la afiliación al RPM.

### **LOS HECHOS**

Expone como fundamento de sus peticiones que nació el 11 de octubre de 1962, que se afilió al RPM en el mes de abril de 1984 hasta octubre de 2002 cuando se trasladó al RAIS, que empezó a cotizar en PORVENIR S.A. en noviembre de 2002 donde se encuentra actualmente afiliado. Que al momento del traslado no obtuvo suficiente información sobre la forma la liquidación de la pensión, pues de haber tenido una buena asesoría se le habría informado que debido a sus ingresos no le era beneficioso estar en el RAIS; que no recibió explicaron sobre los riesgos o implicaciones del traslado de régimen; que en noviembre de 2022 envió derecho de petición a PORVENIR solicitando prueba de la asesoría y solitud de traslado de régimen; que igualmente solicitó a Colpensiones el traslado de régimen y afiliación al sistema general de pensiones, la cual fue negada; y que al no tener una buena asesoría se generó un daño el cual se fue reflejado en la proyección pensional donde se evidencia que le es más beneficioso el RPM.

### **CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Al contestar, COLPENSIONES manifiesta que es cierta la fecha de nacimiento del demandante, sus cotizaciones al RPM, su traslado al RAIS y la solitud ante la entidad de traslado de régimen; frente a los demás hechos aduce que no le constan por ser actos que fueron realizados por el demandante de manera voluntaria. Se opuso a las

pretensiones, ya no existe vicio alguno en el consentimiento. Como excepciones propuso carga dinámica de la prueba, inoponibilidad por ser tercero de buena fe, inexistencia de la obligación en cuanto al traslado, improcedencia de la indexación de las condenas, prescripción, devolución de cuotas y gastos de administración, seguros previsionales, rendimientos ya horros voluntarios debidamente indexados, buena fe de Colpensiones, improcedencia de condena en costas y compensación.

PORVENIR S.A. manifiesta que no le consta la fecha de nacimiento del demandante; que son ciertas sus cotizaciones al RPM y su traslado al RAIS a la AFP PORVENIR S.A., pero que esta se dio en septiembre de 2002; niega que no se haya informado de forma amplia y suficiente al demandante de las características propias del RAIS, sus diferencias frente al RPM y las consecuencias del traslado; que en cuanto al derecho de petición, se atiene al contenido literal de dicho documento; y no le constan los demás hechos por ser ajenos a PORVENIR S.A. Se opuso a las pretensiones. Excepcionó validez de la afiliación al RAIS, inexistencia de vicios en el consentimiento, aplicación del artículo 1746 del Código Civil en relación con los rendimientos financieros, gastos de comisión y primas de seguros, prescripción y buena fe.

### **SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia del 2 de junio de 2023, el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, resolvió: 1) **DECLARÓ** la ineficacia del traslado del demandante al RAIS el 11 de septiembre de 2002; 2) **CONDENÓ** a PORVENIR S.A. a trasladar el monto del capital ahorrado del demandante desde el 1º de noviembre de 2002 hasta el momento en que se dé el traslado efectivo del capital, con los rendimientos, a COLPENSIONES, así como devolver los valores que hubiere recibido por la afiliación como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, frutos e intereses con rendimientos que se hubieren causado, lo descontado para garantía de pensión mínima, gastos de administración y sumas adicionales de la aseguradora y reaseguradora,

sumas que deberán ser debidamente indexadas; 3) **ADVIRTÍÓ** que si la sumatoria de todos los conceptos trasladados, resultare inferior al total del aporte legal correspondiente más los rendimientos que se hubiesen generado en caso de estar en el RPM, será PORVENIR S.A. quien asuma la diferencia que resultare; 4) **ORDENÓ** a COLPENSIONES a recibir de PORVENIR S.A. los valores aludidos, incorporarlos como aportes pensionales en la historia laboral del demandante, imputados a los periodos en que fueron cotizados al RAIS y de acuerdo al IBC que fueron aportados, se tendrán como válidas para el reconocimiento de las prestaciones del sistema pensional; y 5) **CONDENÓ** en costas a PORVENIR S.A.

### **DEL RECURSO DE APELACIÓN**

Inconforme con lo decidido, la apoderada de PORVENIR S.A. presentó recurso de apelación, tendiente a que sea revocada en su totalidad, pues quedó demostrado dentro el cumplimiento de la asesoría e información que la ley le exigía para tal efecto y de ello claramente da cuenta el formulario de afiliación, del cual se desprende ese consentimiento libre y voluntario posterior a recibir la correspondiente asesoría; que quedaron acreditados los actos de relacionamiento y que dan clara cuenta de la intención del actor de permanecer al interior del RAIS, toda vez que no hizo uso de las herramientas legales para buscar el retorno al RPMPD, adoptando una actitud pasiva, lo cual da cuenta de que se hallaba conforme; que al ser una motivación para el retorno al RPM algo económico, debió haber incoado una acción diferente a la que hoy nos convoca, esto es una acción de carácter contractual por el resarcimiento de los perjuicios que siente le fueron irrogados en virtud de esa decisión que adoptó y ratificó de manera libre y voluntaria y sin presiones; que el actor tuvo sendas posibilidades de retorno al RPM, pero para él resultaba más conveniente beneficiarse de rendimientos financieros reportados al capital de su cuenta de ahorro individual, como lo demuestra en su interrogatorio al hacer mención de su cuenta individual y la obtención de rendimientos financieros que influyen en su

mesada pensional; que no está conforme con el traslado de la totalidad de rubros o emolumentos ordenados en la sentencia, debidamente indexados; y que no debe ser condenado en costas, ya que en todo momento la afiliación estuvo ajustada a derecho y en consonancia con el principio de buena fe constitucional.

COLPENSIONES interpuso recurso de apelación respecto de la obligación de recibir a los afiliados que judicialmente deben trasladarse al RPM, donde no se consideran las implicaciones económicas y administrativas que estas providencias representan, partiendo de la base que esta administradora no participó en la celebración del contrato de afiliación a PORVENIR, ni hizo parte del uso de maniobras contrarias a la ley para obtener el traslado de los aportes de los afiliados con ocasión de la entrada de vigencia de la ley 100 de 1993; que la voluntad de la parte actora para migrar de uno a otro régimen, fue un derecho que ejerció al momento de la afiliación al RAIS, hecho ajeno a Colpensiones y contemplado en el ordenamiento jurídico, y la falta de información corresponde a la AFP Porvenir y no a Colpensiones, pero de igual manera se traslada a Colpensiones la responsabilidad de reconocer en un futuro la pensión de vejez, lo que genera un menoscabo de la sostenibilidad financiera de la entidad; y que se debe tener en cuenta el interrogatorio absuelto por el demandante, ya que realizó diversas confesiones y mencionó circunstancias que denotan que recibió suficiente información por parte de los fondos del RAIS.

De igual forma, se conoce del asunto vía grado jurisdiccional de **Consulta**, en las condenas adversas a COLPENSIONES.

### **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

En esta instancia, una vez surtido el traslado respectivo, PORVENIR S.A. manifestó en sus alegatos que se debe revocar la sentencia de primera instancia, toda vez que ésta entidad cumplió a cabalidad con el deber de asesoría e información según la normatividad vigente para

la fecha; que el demandante de forma libre, espontánea y sin presiones, tomó la decisión de vincularse al RAIS; que nunca ejerció su derecho de retracto y además estaba inmerso en la prohibición legal. Y que, en caso de confirmarse la sentencia, no se debe ordenar trasladar los conceptos ordenados en primera instancia, ya este fondo privado actuó con base en la normatividad vigente para dicho momento, por ello, no es razonable ni jurídicamente válido imponer a las administradoras obligaciones y soportes de información no previstos en el ordenamiento jurídico vigente al momento del traslado de régimen.

COLPENSIONES en los alegatos de conclusión dice que el análisis de la información suministrada por la AFP y el alcance de la asesoría que debió brindarse al momento de la afiliación, deben ser valoradas bajo la normatividad vigente para la fecha de suscripción del formulario o de la materialización del traslado.

Dice que en caso de ser confirmada la ineficacia de afiliación Porvenir S.A. devuelva a Colpensiones el traslado de las sumas correspondientes al saldo de la cuenta de ahorro individual, los gastos o cuotas de administración, los aportes al Fondo de Garantía de Pensión Mínima, los seguros previsionales, las primas de los seguros de invalidez y sobrevivencia, la prima de reaseguro de Fogafín, frutos e intereses y los aportes al Fondo de Solidaridad Pensional causados durante el tiempo en que el señor JOSE EFRAIN GUATAQUIRA PINTO estuvo afiliado a la Administradora del RAIS debidamente indexadas.

### **CONSIDERACIONES:**

Está acreditado que, *i)* el Sr. JOSÉ EFRAÍN GUATAQUIRA PINTO nació el 11 de octubre de 1962; *ii)* se afilió por primera vez al sistema pensional en el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y comenzó a realizar cotizaciones allí el día 9 de abril de 1984<sup>1</sup> acumulando un total

---

<sup>1</sup> Folios 55 a 61 de la contestación de Colpensiones.

de 608,43 semanas; *iii)* y que el 11 de septiembre de 2002<sup>2</sup> se trasladó a la AFP PORVENIR S.A., entidad a la cual se encuentra actualmente vinculado.

Ahora bien. La diferencia jurídica que se plantea en este caso, consistente en la pretensión de la parte actora en punto que se declare ineficaz el traslado que efectuó desde el Fondo público y común administrado por el ISS, al Fondo privado de ahorro individual, fundada en una insuficiente información por parte de esta última entidad en cuanto a las consecuencias reales de dicha determinación, ha sido materia de múltiples decisiones judiciales orientadas desde la cúspide de la jurisdicción ordinaria laboral.

Si bien es cierto, en principio, tal traslado se hizo como producto de un concurso de voluntades entre personas plenamente capaces, no lo es menos que se presentaba una relación asimétrica en el sentido de que los Fondos privados como agentes del sector financiero de la economía, tenían, desde su creación, el deber legal de suministrarle al afiliado una explicación completa pero concreta, hecha a la medida de la situación particular del interesado, de la consecuencias del traslado y con la esencial finalidad de que este pudiese tomar una decisión informada sobre un aspecto ligado a su proyecto de vida futura.

En efecto, desde la expedición del decreto 663 de 1993<sup>3</sup>, o Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, el que en su Capítulo VIII incluye a las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías, dispuso dicha obligación en los siguientes términos:

*“Art 97. **Información a los usuarios.** Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan, la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que*

---

<sup>2</sup> Folio 54 de la contestación de Porvenir S.A.

<sup>3</sup> Norma posteriormente actualizada por la ley 795 de 2003 “*ley por la cual se ajustan algunas normas del Estatuto Orgánico Financiero*”

*realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claro y objetivo, escoger las mejores opciones del mercado.*

Por su parte, la Ley 100 de 1993 también intervino el punto, pues en su artículo 271 estableció:

*“Art. 271. **Sanciones para el Empleador.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral, se hará acreedor en cada caso y por cada afiliado a una multa, impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder 50 veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”*

Así mismo, importa señalar al respecto, que la jurisprudencia laboral ha sido consistente, reiterada, pacífica y uniforme desde el año 2008, en señalar que el deber de información a cargo de las administradoras de fondos de pensiones, es un deber exigible desde su creación, advirtiendo, además, que en este tipo de casos la carga de la prueba recae sobre los fondos privados, especialmente por plantearse una afirmación indefinida como lo es el hecho que la persona afiliada no ha recibido la suficiente información, lo que solo puede ser desvirtuado con la prueba positiva por la cual se acredite que tal obligación sí se cumplió.

Tesis que se introdujo desde las sentencias 31.989 y 31.314, ambas del 9 de septiembre de 2008, por cuenta de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, cuyas consideraciones se han venido renovando y reiterando con el transcurso de los años a través de múltiples pronunciamientos. Cabe destacar lo que se dijo en aquellas primeras providencias, así, en la Rad. N° 31.989 de 2008:



*“Las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible, a la medida de la asimetría que se ha de salvar entre un administrador experto y un afiliado lego, en materias de alta complejidad. Es una información que se ha de proporcionar con la prudencia de quien sabe que ella tiene el valor y el alcance de orientar al potencial afiliado o a quien ya lo está, y que cuando se trata de asuntos de consecuencias mayúsculas y vitales, como en el sub lite, la elección del régimen pensional, trasciende el simple deber de información, y como emanación del mismo reglamento de la seguridad social, la administradora tiene el deber del buen consejo, que la compromete a un ejercicio más activo al proporcionar la información, de ilustración suficiente dando a conocer las diferentes alternativas, con sus beneficios e inconvenientes, y aún a llegar, si ese fuere el caso, a desanimar al interesado de tomar una opción que claramente le perjudica.”*

Del desarrollo jurisprudencial posterior se evidencian algunos ejes claves para la declaratoria de la ineficacia del traslado y que se resumen en lo siguiente:

- (i) El juez debe constatar el deber de información como un elemento ineludible de la ineficacia del acto jurídico;
- (ii) El simple consentimiento vertido en el formulario de afiliación es insuficiente, pues ello no demuestra por si solo que se hubiere brindado una información idónea, y se requiere en todo caso la prueba del consentimiento informado;
- (iii) Le incumbe a la respectiva AFP del RAIS, por inversión de la carga de la prueba, demostrar que en el momento del traslado le suministró al afiliado (a) la información suficiente y completa sobre las consecuencias de tal decisión, en los términos del artículo 1604 del Código Civil, según el cual, la prueba de la diligencia y cuidado incumbe a quien debió emplearlo; y

- (iv) No es necesario ser beneficiario del régimen de transición o estar próximo a causar el derecho para que se produzca la ineficacia del traslado.

En el presente caso, no se observan pruebas fehacientes que permitan tener por acreditado que el fondo privado brindó, en el momento del traslado, una información integral de las condiciones subjetivas del afiliado, con explicación de las ventajas y desventajas de la reubicación entre regímenes y su incidencia en su caso particular, de tal manera que aquel pudiera tener un panorama claro de sus futuras expectativas. Esto es, el Fondo privado incumplió su deber de información, al no suministrar, de modo claro y preciso, las características, consecuencias y efectos del cambio de régimen.

Del interrogatorio de parte absuelto por el actor, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información, manifiesta simplemente al demandante sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar del traslado de régimen que, el formulario lo firmó presionado, toda vez la información en ese momento era que el ISS se iba a acabar y debían pasarse a un fondo privado, además de que la empresa donde laboraba les manifestó que lo mejor era pasarse a un solo fondo por facilidad en la empresa, por tal motivo se afilió a PORVENIR; que no hizo uso de su derecho de retracto o periodo de gracia por desconocimiento de los mismos; que no contaba con el conocimiento de las diferencias de los regímenes, ya que no se le brindó ese tipo de información en el momento del traslado; y que la información que le dieron en su momento fue que tendrían una cuenta personal y que podría ser heredable, pero no le hablaron de las ventajas y desventajas de un régimen y otro.

De lo anterior no se deriva que aparezca clara la prueba de un reconocimiento de que los promotores del Fondo privado hubieren informado en detalle las diferencias jurídico-financieras de los sistemas pensionales, con expresión de sus características propias, así como las

repercusiones que una decisión de semejante calado podría traerle al afiliado al momento de hacer efectiva la prestación.

Lo dicho permite dar aplicación al citado artículo 271 de la Ley 100 de 1993 en el sentido de que cuando el empleador o cualquier persona natural o jurídica atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de instituciones del Sistema de Seguridad Social como lo son las AFP, *“La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador”*.

No es de recibo el argumento relacionado con la imposibilidad en el traslado de régimen con fundamento en el art. 2 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 13 de la Ley 100 del 1993, tema frente al cual la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, según sentencias como la SL 655 y SL 1022 del 23 de marzo de 2022, ha considerado que es un despropósito *“... centrar el análisis en los períodos definidos en la ley para hacer traslados entre regímenes, o la limitante para realizarlo cuando le falten menos de diez (10) años para alcanzar la edad requerida, puesto que lo pretendido siempre fue la nulidad y/o ineficacia del traslado efectuado a la AFP Porvenir S.A. en el año 1999”*.

Ahora bien; tampoco es válido el argumento de COLPENSIONES en cuanto solicita considerar las implicaciones económicas que se pueden llegar a generar con decisiones como ésta, especialmente por existir una eventual afectación a la sostenibilidad financiera del sistema más cuando no participó en el acto de traslado, siendo un derecho que ejerció la demandante en su momento y permitido según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 797 de 2003.

El principio de sostenibilidad financiera de las pensiones, entronizado en el Acto Legislativo 01 de 2005, está orientado a lograr el aseguramiento de su propia subsistencia. Esto es, se impone la garantía de que se pueda contar con los recursos necesarios para reconocer y

pagar las diversas prestaciones a los afiliados al sistema, presuponiendo la limitación de los recursos disponibles, y que, por ello mismo, deben ser distribuidos de acuerdo con las necesidades de la población, buscando la efectividad de los derechos y la eficacia y solidaridad del sistema. Y para esto es indispensable asegurar el pago efectivo de las cotizaciones, aunado al concurso del Estado cuando ello sea requerido, de tal modo que el sistema sea viable para el pago de las pensiones de los actuales y futuros pensionados.

En casos como el presente, el regreso del demandante al RPM no implica que necesariamente vaya a haber una afectación al sistema, pues a dicho fondo le llegan los dineros que el demandante alcanzó a acumular en el Régimen de Ahorro Individual. junto con los rendimientos financieros y todos aquellos conceptos recibidos por administración de los recursos, seguros y garantía de pensión mínima como más adelante se verá, sin que esté probado en el proceso que no sea posible financiar la pensión a la que pueda llegar a acceder.

Además de advertir la Sala, que del interrogatorio de parte que le fue practicado al afiliado, no se vislumbra confesión alguna respecto del cumplimiento a ese deber de información. Si bien pudo haber recibido algunas explicaciones generales acerca del funcionamiento del Régimen de Ahorro Individual y los rendimientos que generarían los aportes acumulados en su cuenta de ahorro individual, ello no significa una asesoría completa, clara, detallada y precisa de todos los alcances de su decisión.

En consecuencia, en este puntual aspecto se **CONFIRMARÁ** la decisión adoptada en primera instancia.

### **Conceptos a trasladar**

De otro lado, en cuanto a la decisión de ordenar también la devolución de las cuotas de administración, seguros previsionales y demás

conceptos, tema cuestionado en el recurso de apelación por PORVENIR S.A., basta con indicar que la Sala ha considerado en múltiples pronunciamientos, que es factible ordenar a la AFP correspondiente, que proceda con la devolución a COLPENSIONES de todas las sumas recibidas con ocasión de la afiliación de cada persona, teniendo en cuenta que no es ello más que una consecuencia natural de la ineficacia del traslado, en tanto el estado de cosas vuelve a su situación anterior, como si el acto nunca hubiera existido.

Criterio que ha adoptado acogiendo lo que en tal sentido ha indicado en reiteradas oportunidades la SCL de la Corte Suprema de Justicia en sentencias como las ya citadas, pero con mayor énfasis en otras como la SL 4964 de 2018 o la SL 2877 del 29 de julio de 2020, rad. 78667, rememorada en las sentencias SL 5595 de 2021 y SL 1637 del 11 de mayo de 2022, en las que dijo expresamente lo siguiente:

*"Entonces, según la norma precedente, el efecto de la declaratoria de ineficacia es retrotraer las cosas al estado en que se hallarían si no hubiese existido el acto o contrato declarado ineficaz, a través de las restituciones mutuas que deban hacer los contratantes, que debe decretar el juez y para lo cual se fijan unas reglas en tal disposición. En otros términos, **la sentencia que en tal sentido se dicte, tiene efectos retroactivos y, en virtud de ellos, cada una de las partes debe devolver a la otra lo que recibió con ocasión del negocio jurídico que trasgredió las prescripciones legales**, toda vez que este no produce efectos entre ellas y el vínculo que se entendía que había, lo rompió tal providencia.*

(...)

*En el sub lite, **la devolución de todos los recursos acumulados en la cuenta de ahorro individual en el RAIS debe ser plena y con efectos retroactivos**, porque los mismos serán utilizados para la financiación de la pensión de vejez a que tiene derecho el demandante en el régimen de prima media con prestación definida. **Ello, incluye el reintegro a Colpensiones de los valores que cobraron los fondos privados a título de cuotas de administración y comisiones, incluidos los aportes para garantía de pensión mínima**, pues será aquella entidad la encargada del manejo de esos recursos y del reconocimiento del derecho pensional."*

Se advierte igualmente que la orden a PORVENIR S.A. de trasladar los conceptos mencionados, es decir, las cuotas de administración, seguros previsionales y aportes destinados al fondo de garantía de pensión mínima, deben incluir la respectiva indexación tal y como fue ordenado en primera instancia, pues así lo ha entendido igualmente la propia jurisprudencia ya citada de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En ese aspecto, contrario a lo que sostiene la apoderada de PORVENIR S.A., dicha Corporación sí ha ordenado tal indexación y lo ha hecho en sentencias como las ya citadas, pero de forma más clara en las sentencias SL 3349-2021, SL359-2021 y SL3394-2022, en las que concluyó, entre otras cosas, que uno de los efectos de la declaratoria de la ineficacia de traslado de régimen pensional, es que *"... todas las cotizaciones efectuadas por el promotor del proceso al sistema general de pensiones, durante su vida laboral, deben entenderse realizadas al de Prima Media con Prestación Definida, administrado por Colpensiones, esto es, que mantendrán su poder adquisitivo inicial, por lo que se deben indexar."*

Conforme a las ordenes anteriores, no se puede pasar por alto los reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia en las sentencias SL-843-2022, SL-755-2022 y SL-756-2022, en donde se impone a las AFP privadas la obligación de que junto con las sumas objeto de traslado, se entregue información donde los conceptos trasladados aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen.

Así pues, para esta Sala es válido que se exija una claridad en los valores y conceptos a devolver, por lo que se deberá confirmar las condenas proferidas, reiterando que, al momento de efectuar el traslado de los diferentes valores a COLPENSIONES, todos los

conceptos aparezcan discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen, tal y como lo señaló la juez.

En lo que tiene que ver con la orden de la a quo, de reintegrar a COLPENSIONES el bono pensional que se pudiera haberse pagado a favor del actor, tal decisión resulta desacertada, toda vez que al ser ineficaz la afiliación del demandante al RAIS, no se origina el derecho a bono pensional, al menos el tipo A, y por tal razón, si el referido bono fue pagado se debe efectuar la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES, por lo que tal orden será **PRECISADA**.

### **Condena en costas**

Finalmente, otro tema que cuestiona el apoderado de PORVENIR S.A. a través de su recurso de apelación, tiene que ver con la condena en costas impuesta a su cargo. Para resolver la inconformidad que plantea la recurrente, basta con señalar que el artículo 365 del Código General del Proceso ratificó el criterio objetivo en cuanto ordena que en los procesos y en las actuaciones posteriores en que haya controversia, se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto, entre otros casos.

Resulta que en este caso PORVENIR presentó oposición a las pretensiones de la demanda alegando entre otras cosas el cumplimiento del deber de información y la validez del acto jurídico de traslado, lo que implica que deba entenderse como entidad vencida en juicio y por ende obligada al pago de las costas procesales.

Con base en lo anterior, la decisión de primera instancia será **CONFIRMADA y PRECISADA**.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A. y COLPENSIONES, por haber sido vencidas en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$1'160.000, dividido en partes iguales para cada uno.

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

### **R E S U E L V E:**

**CONFIRMAR** la sentencia proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, 2 de junio de 2023, pero **PRECISANDO** que en el evento tal que se hubiese pagado bono pensional tipo A, a favor del demandante, la devolución del importe de este debe efectuarse al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, y no a COLPENSIONES. Respecto del importe de bono pensional distinto al tipo A, se confirma que debe ser entregado a COLPENSIONES.

Costas como se dijo en la parte motiva de esta providencia.

Notifíquese por EDICTO.

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez  
Magistrado  
Sala Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia



**Jaime Alberto Aristizabal Gomez**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Francisco Arango Torres**  
**Magistrado**  
**Sala Laboral**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **ad16125de62a81b1a0ff81524f927b584b47da0cdd947405cd8781a5932d127f**

Documento generado en 10/11/2023 03:33:25 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**